



Asamblea General

Distr. limitada
30 de septiembre de 2002
Español
Original: francés

Comité Especial encargado de negociar una convención contra la corrupción

Tercer período de sesiones

Viena, 30 de septiembre a 11 de octubre de 2002

Tema 3 del programa

Examen del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, con especial hincapié en los artículos 1 a 39

Propuestas y contribuciones recibidas de los gobiernos

Argelia: enmiendas de los artículos 19, 24 a 26, 28 a 31, 33 y 36

Artículo 19: Penalización de los actos de corrupción en que participen funcionarios públicos

Variante 2

1. La variante 1 reproduce el texto del párrafo 1 del artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I), que presenta la ventaja de que ya ha sido aprobada por consenso, mientras que la variante 2 expresa un enfoque mucho más amplio. En opinión de la delegación de Argelia, la noción expresada con la palabra “ventajas” en los apartados a) y b) de la variante 2 podría expresarse más explícitamente con las palabras “regalos, comisiones, primas o bienes”. Por consiguiente, se propone enmendar la variante 2 para que diga lo siguiente:

“Artículo 19 Penalización de los actos de corrupción en que participen funcionarios públicos

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los siguientes actos de corrupción:

a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios indebidos, como dádivas,



favores, regalos, comisiones, primas o bienes que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, o la promesa de otorgarlos, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;”

b) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, regalos, comisiones, primas o bienes que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.”

Artículo 24: Abuso de funciones

2. A fin de conferir al abuso del cargo su pleno significado en el contexto de la corrupción, que es el objeto del presente proyecto de convención, se propone enmendar la variante 1, que es la preferida por la delegación de Argelia. Deberían sustituirse las palabras “el ejercicio abusivo de funciones o la realización” por las palabras “el ejercicio abusivo de funciones o del cargo que ocupa a través de la realización,” a fin de que el texto del artículo 24 sea el siguiente:

“Artículo 24 Abuso de funciones

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito [conforme a los principios fundamentales de su derecho interno] el ejercicio abusivo de funciones o del cargo que ocupa a través de la realización, por parte de un funcionario público, un funcionario internacional o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.”

Artículo 25: Enriquecimiento ilícito

3. La delegación de Argelia tiene conciencia de las dificultades planteadas por la cuestión de la penalización del enriquecimiento ilícito. Entiende que el aumento injustificado del patrimonio de un funcionario público fuera de toda proporción con sus legítimos ingresos pasados o presentes podría ser el resultado de actos de corrupción que justificaran la acusación de enriquecimiento ilícito. No obstante, el enriquecimiento podría producirse a raíz de la especulación. Sólo mediante la presentación de pruebas podrá juzgarse si el enriquecimiento constituye un delito. En vista de la importancia de esta disposición en la lucha contra la corrupción, la delegación de Argelia opina que debería mantenerse el artículo 25 con una nueva redacción, basada en las distintas variantes, a saber:

“Artículo 25 Enriquecimiento ilícito

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito el enriquecimiento ilícito o el aumento injustificado del patrimonio, los bienes y los ingresos de un funcionario público que no sea compatible con sus legítimos ingresos en

concepto de remuneración o con ingresos provenientes de otras fuentes lícitas.”

Artículo 26: Aprovechamiento de información reservada o confidencial

4. Utilizando como base la variante 2, la delegación de Argelia propone que se enmiende el artículo 26 para que diga lo siguiente:

“Artículo 26

Aprovechamiento de información reservada o confidencial

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan intencionalmente, los siguientes actos de corrupción:

a) La revelación indebida que de una noticia o documento que deba permanecer en reserva haga un funcionario público y la utilización en provecho propio o ajeno de un descubrimiento científico u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deba permanecer en secreto o reserva;

b) El uso indebido, en su propio beneficio o en el de un tercero, de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, y que no deba ser objeto de conocimiento público, que haga el funcionario público empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier institución pública, o la utilización en provecho propio o de un tercero de información obtenida en calidad de funcionario público, incluso durante el período posterior a la separación del servicio.”

Artículo 28: Beneficios indebidos

5. Se propone que se supriman las palabras “a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento”, dado que no añaden ningún elemento complementario al significado de esta disposición. La versión enmendada del artículo 28 sería la siguiente:

“Artículo 28

Beneficios indebidos

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito la solicitud de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios indebidos o en mayor cantidad que los señalados por la ley, hecha directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas.”

Artículo 29: Otros delitos

6. Se propone que se suprima el artículo 29, dado que trata situaciones contempladas en otras partes a cuyo respecto no se justifica la inclusión de una

disposición especial. Además, es difícil catalogar como actos de corrupción los casos mencionados en las tres variantes propuestas.

Artículo 30: Equivalencia de las sanciones

7. Si bien se hace cargo de las preocupaciones de los autores de esta disposición, la delegación de Argelia desea señalar que dichas cuestiones están contempladas en otras disposiciones del proyecto de convención. Por ejemplo, la tentativa y la complicidad para la comisión de un delito mencionadas en el párrafo 1 ya están contempladas en el artículo 20 (Complicidad, instigación o intento de participar en un delito). El párrafo 2, en el que se solicitan sanciones privativas de la libertad en las que se tenga en cuenta la gravedad de los actos de corrupción, se superpone con el párrafo 1 del artículo 40 (Proceso, fallo y sanciones). Por consiguiente, se propone que se supriman los párrafos 1 y 2. Se propone asimismo que se reformule el párrafo 3 siguiendo la redacción de la disposición similar del apartado f) del párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de modo que el artículo 30 diga lo siguiente:

*“Artículo 30
Equivalencia de las sanciones*

El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de alguno de los delitos tipificados en los artículos [...] [artículos sobre la penalización] de la presente Convención podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.”

Artículo 31: Refuerzo de las sanciones

8. Se propone que se suprima el artículo 31 y que el párrafo 1, que trata de la imposición de penas más severas para los delitos de corrupción cometidos de forma organizada, se inserte después del párrafo 1 del artículo 40 (Proceso, fallo y sanciones). El párrafo 2 debería suprimirse debido a que su formulación se aleja de la problemática de la corrupción.

Artículo 33: Penalización del blanqueo del producto de la corrupción

9. La delegación de Argelia prefiere la variante 3, que se basa en el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. No obstante, dada la pertinencia de los apartados a) y b) del párrafo 1 de la variante 2, en los que se detallan determinadas prácticas utilizadas para blanquear el producto de la corrupción, se propone que se incorporen esos apartados en la variante 3 y que los apartados siguientes se numeren en consecuencia. La versión enmendada del artículo 33 debería rezar:

“Artículo 33

Penalización del blanqueo del producto de la corrupción

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

- a) i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito;
- ii) La administración, custodia, enajenación, cambio, conversión, depósito, entrega en garantía, transporte, transferencia, inversión, alteración o destrucción de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;
- iii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;
- b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:
 - i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito;
 - ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:

- a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;
- b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos tipificados en la presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con la corrupción;
- c) A los efectos del apartado b) *supra*, entre los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta;

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se apliquen a las personas que hayan cometido el delito determinante;

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.”

Artículo 36: Medidas contra la corrupción

10. Cada una de las tres variantes del artículo 36 contiene un principio que podría establecerse como medida contra la corrupción: en la variante 1 es la promoción de la integridad, en la variante 2 la adopción, por cada Estado Parte, de medidas eficaces para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos y en la variante 3, el principio de la cancelación de todo contrato adjudicado como consecuencia directa de un acto de corrupción. Se propone reformular el artículo 36 teniendo en cuenta las tres variantes. Los dos primeros párrafos de la versión enmendada del artículo 36 se basan en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La versión enmendada del artículo 36 debería rezar:

“Artículo 36 Medidas contra la corrupción

1. Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente Convención, cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida en su actuación.

3. Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno, podrá optar por cancelar o rescindir todo contrato que haya adjudicado o todo arreglo o beneficio que haya concedido como consecuencia directa de un acto de corrupción.”